



global witness



David Weight  
President  
Cobalt Institute  
18 Jeffries Passage  
Guildford, GU1 4AP  
Reino Unido

Julio de 2018

Estimado señor David Weight:

## **El Marco de Evaluación de Riesgos de la Industria del Cobalto (CIRAF):**

### **Declaración conjunta de ONG**

Somos un grupo de organizaciones no gubernamentales especializadas en el mundo empresarial y los derechos humanos y, concretamente, en el impacto de la industria minera. Algunas de nuestras organizaciones formaron el primer grupo de trabajo de la OCDE sobre cadenas de suministro responsables de minerales y fueron miembros del comité de redacción tripartito de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (Guía de la OCDE) y sus suplementos relativos al oro y el estaño, el tantalio y el tungsteno. También hemos contribuido a elaborar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y hemos denunciado formalmente su incumplimiento.

Le escribimos en relación con la propuesta de Marco de Evaluación de Riesgos de la Industria del Cobalto (CIRAF), del Instituto del Cobalto (CI), en el entendimiento de que no va a haber una consulta pública formal.

Teniendo en cuenta la influencia de los miembros del Instituto del Cobalto (CI) dentro del mercado de este mineral y los continuados abusos documentados y otras señales de alarma en las cadenas de suministro del cobalto, nos dirigimos a usted para que se garantice que el CIRAF incorpora todos los elementos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de la ONU, tal como se aplican al sector de la minería en virtud de la Guía de la OCDE. Esta es la norma internacional establecida para la conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro globalizadas.

Si no se adopta esta norma en su totalidad, el CIRAF no podrá ser efectivo para identificar, prevenir y abordar los riesgos y abusos en materia de derechos humanos en la cadena de suministro del cobalto, lo que irá en grave detrimento de su credibilidad. El impacto de la extracción industrial y artesanal de cobalto y de su comercio en los derechos humanos y los

medios de subsistencia de miles de mineros y mineras y sus comunidades está identificado y ampliamente documentado.

Como los miembros de este grupo han afirmado en otras ocasiones en los últimos cinco años, los planes del sector como el CIRAF pueden proporcionar información y recursos de utilidad a las empresas y apoyar sus esfuerzos individuales en cuanto a diligencia debida. Sin embargo, la esencia de los Principios Rectores de la ONU es el principio fundamental de la responsabilidad *individual* de las empresas. Las empresas son responsables individualmente del impacto de sus actividades. La responsabilidad de actuar con la debida diligencia no puede delegarse en terceras partes. La evaluación del alineamiento de la OCDE de cinco destacados planes del sector, publicada el pasado mes de abril, deja meridianamente claros este principio y las limitaciones de dichos planes. Instamos al Instituto del Cobalto a que tenga en cuenta las conclusiones de la evaluación del alineamiento para garantizar la credibilidad y la eficacia de su propio plan.

La iniciativa CIRAF tiene razón cuando sugiere que puede posibilitar que las empresas asociadas “lleven a cabo una mejor gestión de riesgos con arreglo a las buenas prácticas del sector y a las normas globales específicas sobre el abastecimiento responsable de minerales”.<sup>1</sup> Sin embargo, hay que dejar claro desde el principio a los miembros que el CIRAF es una herramienta para *posibilitar* que ejerzan la debida diligencia con arreglo a las normas internacionales y no un *sustituto* de dichos esfuerzos. La diligencia debida no es una actividad puntual, una casilla que marcar, en la gestión de riesgos. Para que sea eficaz en la mejora de las conductas en la cadena de suministro, ha de ser continua, detallada y transparente, y estar sometida a escrutinio externo.

En los últimos años se ha relacionado a las empresas dedicadas a la minería y al comercio del cobalto con muchos, variados y atroces abusos (véanse los casos correspondientes del documento complementario). Las empresas miembros del CI deben tomar medidas significativas para buscar y abordar mejor los riesgos y abusos asociados al sector y demostrar públicamente que lo están haciendo. El CIRAF podría ser una herramienta complementaria útil para facilitar estas actuaciones.

Los informes iniciales del proyecto de plan indican que es probable que el CIRAF incluya un amplio abanico de riesgos, incluidos los que figuran en el anexo II de la Guía de la OCDE: Modelo de Política de Cadenas de Suministros para una Cadena de Suministros Global y Responsable en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo.

Esto es alentador y, si se aplica debidamente, respaldaría el ejercicio enérgico y exhaustivo de la diligencia debida en la cadena de suministro por parte de las empresas. La norma de la OCDE dice claramente que las empresas deben revisar sus cadenas de suministro para detectar riesgos y abusos en materia de derechos humanos, así como daños sociales y medioambientales, y mitigar esos riesgos y remediar los abusos que se identifiquen en cualquiera de sus puntos. Todo ello ha de ir unido a una transparencia total que permita un examen o arbitraje independientes en caso necesario.

Para garantizar que el CIRAF y otras nuevas iniciativas relativas a la cadena de suministro cumplen la norma internacional establecida para el abastecimiento responsable de minerales, es

fundamental que se incorporen en él las siguientes normas mínimas, basadas en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, la Guía de la OCDE, la evaluación de alineamiento<sup>2</sup> y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

- Garantizar que las empresas se responsabilizan individualmente de identificar y gestionar los riesgos para los derechos humanos en su cadena de suministro y de informar públicamente de sus esfuerzos en tal sentido en el contexto del marco de riesgos. Las empresas no pueden externalizar su responsabilidad individual amparándose en los esfuerzos del CI. Aunque la provisión a las empresas de apoyo y orientación sobre buenas prácticas por parte del CI puede ser valiosa, cada empresa debe garantizar por sí misma el cumplimiento de las normas internacionales sobre debida diligencia y abastecimiento responsable, y demostrar públicamente que las cumple mediante la revelación total de los riesgos en su cadena de suministro y las medidas que ha adoptado al respecto.
- Verificar toda la variedad de riesgos y abusos como parte de la debida diligencia respecto de la cadena de suministro, tal como figuran en el anexo II de la Guía de la OCDE. Esto incluye, entre otras cosas, las peores formas de trabajo infantil y condiciones laborales peligrosas e inseguras para personas adultas, que sufren abusos contra su derecho a la salud y repercusiones negativas en su derecho a medios de subsistencia. Las comprobaciones de las cadenas de suministro deben incluir también riesgos de corrupción, dada la frecuencia de ésta en el sector de la minería formal.<sup>3</sup>
- Mitigar todos los riesgos que figuran en el anexo II de la Guía de la OCDE, incluidos elementos para gestionar los riesgos significativos de corrupción en las cadenas de suministro del cobalto. Por ejemplo, debería introducirse la transparencia de la información contractual y financiera para reducir el riesgo de corrupción. Basándonos en los extensos y detallados estudios sobre los riesgos de corrupción en el sector de la minería congoleña, recomendamos que las empresas y/o los gobiernos hagan públicos sin reservas los siguientes datos:
  - Detalles de los procesos de licitación competitiva,
  - Todos los contratos,
  - Beneficiarios efectivos de todas las empresas asociadas, contratistas y filiales,
  - Pagos efectuados por cada proyecto a gobiernos y entidades estatales (incluidas las empresas de propiedad estatal), tanto las cantidades como los destinatarios.
- Abordar cualquier abuso contra los derechos humanos que las empresas identifiquen que se esté cometiendo en cualquier punto de sus cadenas de suministro, e informar públicamente de las medidas adoptadas. Si se han producido abusos contra los derechos humanos en algún punto de la cadena de suministro, la empresa, en colaboración con otros actores pertinentes, como sus proveedores y las autoridades nacionales, deberá tomar medidas para mitigar esos riesgos y remediar el daño sufrido por las personas afectadas. Aun en el caso de que una empresa resuelva su relación con un proveedor

cuando se hayan cometido abusos contra los derechos humanos, la empresa sigue siendo responsable de tomar medidas correctivas cuando se haya beneficiado en el pasado del trabajo de personas adultas y menores de edad que han sufrido abusos contra los derechos humanos.

- Reforzar el derecho a un recurso efectivo. Cuando se hayan cometido abusos contra los derechos humanos, todas las víctimas tienen derecho a un recurso efectivo. Este derecho está claramente consagrado en el derecho internacional. El recurso puede adoptar la forma de restitución, de indemnización y de garantías de no repetición. El derecho a un recurso contiene elementos de fondo y de procedimiento, y exige que se proporcione a las víctimas:
  - Un acceso equitativo y efectivo a la justicia,
  - Una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido,
  - El acceso a información pertinente sobre el daño y vías de reparación.

Las empresas deben remediar cualquier impacto negativo en los derechos humanos que causen o contribuyan a causar. En el caso de los abusos cometidos por actores de la cadena de suministro de una empresa y/o cuando el recurso efectivo dependa necesariamente de la actuación del Estado, las empresas, con arreglo a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, deberán usar su influencia para presionar a favor de un recurso efectivo del Estado y colaborar con los procesos oficiales.

El mecanismo de reclamaciones de la propia empresa nunca deberá sustituir los procesos de arbitraje oficiales en casos en los que se haya infringido una ley nacional o internacional. Deberá haber un arbitraje independiente de la empresa afectada cuando las reclamaciones no se puedan resolver mediante el diálogo y/o en los abusos más graves. Cuando las reclamaciones se gestionen mediante un mecanismo operativo de reclamaciones de la empresa, éste deberá ser legítimo, transparente y compatible con los derechos.

- Con arreglo al elemento de “saber y hacer saber” contenido en los Principios Rectores de la ONU y al paso 5 de la Guía de la OCDE, las empresas deberán informar públicamente de sus esfuerzos individuales en materia de diligencia debida. Para impulsar la mejora, la cadena de suministro puede asumir la responsabilidad colectiva de los riesgos y abordarlos compartiendo información sobre estos riesgos, los abusos y la mitigación. De este modo se posibilita además que las partes interesadas monitoricen y evalúen la práctica de las empresas. La mera asociación con el CIRAF no puede utilizarse como prueba de una práctica responsable. Las empresas deben demostrar su práctica de abastecimiento responsable mediante la publicación de los sistemas internos establecidos, información detallada sobre perjuicios y riesgos específicos identificados, y esfuerzos realizados para mitigar y remediar dichos perjuicios y riesgos específicos. Del mismo modo, es fundamental que el CIRAF no totalice los informes sobre riesgos antes de su publicación.

- Las empresas que apliquen el CIRAF deberán demostrar que lo cumplen y mejorar la credibilidad de esos esfuerzos mediante una evaluación independiente por terceros en puntos de la cadena de suministro comparables a aquellos para los que la Guía de la OCDE exige una auditoría. La autoevaluación para verificar la práctica de la empresa en comparación con la norma de la OCDE no servirá para cumplir las obligaciones internacionales en materia de debida diligencia. Del mismo modo, las autoevaluaciones realizadas por el CI a sus propios miembros no serán suficientes para demostrar los esfuerzos realizados por cada *empresa individual* para cumplir la norma de la OCDE. Tal como se concluyó recientemente en la evaluación de alineamiento, los planes del sector no se establecen para vigilar la debida diligencia de cada uno de sus miembros, y tampoco son efectivos para tal fin. Debido sobre todo a la gravedad de las denuncias formuladas contra empresas miembros del CI en el pasado, la mera verificación del CIRAF no se considerará creíble y pondría en peligro la integridad del plan.
- Las evaluaciones o auditorías por terceros no deberán considerarse el objetivo principal del CIRAF. Del mismo modo, deberá evitarse el desarrollo de cualquier clase de modelo de certificación en torno al CIRAF. No deberá dividirse a los miembros en categorías estáticas, binarias, como “conforme” y “no conforme”. Por el contrario, se deberá animar a los miembros a que reúnan más y mejor información sobre riesgos y abusos en sus cadenas de suministro para responder a ellos, tal como se expone en esta carta, y a que informen sobre los avances. Este tipo de información pública permite aprovechar todos los recursos de la cadena de suministro para hacer frente a los desafíos y problemas.
- Usar la evaluación de alineamiento de la OCDE, incluido el elemento de gobernanza, para garantizar que el CIRAF está realmente alineado con la Guía de la OCDE.
- Evitar exigir declaraciones binarias como “sin trabajo infantil” o “sin conflicto”. Las cadenas de suministro son dinámicas, sobre todo en lugares de alto riesgo. En consecuencia, incluso las cadenas de suministro mejor gestionadas son vulnerables a la posibilidad de contribuir a abusos contra los derechos humanos o a la corrupción. Las prácticas de abastecimiento responsable de los miembros del CIRAF no deberán convertirse en una etiqueta pasiva. Por el contrario, las empresas deberán demostrar cómo revisan activamente sus cadenas de suministro de forma continua en busca de riesgos y abusos y, cuando corresponda, cómo adoptan medidas para abordar esos problemas. Exigir declaraciones binarias puede también animar a las empresas a evitar activamente cadenas de suministro de “alto riesgo”, lo que a su vez puede repercutir de forma negativa en economías locales y en las personas que trabajan en la minería y las comunidades que dependen del comercio de esas zonas. Las empresas no deberán tratar de imponer boicots de hecho a minerales concretos de zonas concretas, sino abordar los riesgos cuando surjan.
- Alentar, no desalentar, el abastecimiento responsable en zonas de alto riesgo, así como la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Los productores de la MAPE y los exportadores de zonas de alto riesgo están tomando medidas decisivas para actuar con arreglo a la Guía de la OCDE. Las normas internacionales, y la Guía de la OCDE en

concreto, fomentan la relación progresiva con productores de la MAPE. El CIRAF deberá animar proactivamente a las empresas miembros a que se abastezcan de productores de MAPE que tomen medidas progresivas para implementar la Guía de la OCDE.

- Garantizar que las distorsiones del mercado causadas por los planes del sector no perjudican la MAPE, sino que generan información necesaria para garantizar que las personas que trabajan en ella obtienen una proporción justa de los beneficios generados del comercio y mejoran sus condiciones laborales.

En general, el CIRAF debe tomar nota de las lecciones fundamentales aprendidas hasta la fecha de otras iniciativas sobre abastecimiento responsable. Por ejemplo, la retirada del sector privado mayorista o su desvinculación de una zona de abastecimiento o un tipo de producción, desencadenada meramente por un escrutinio más riguroso, podría tener un impacto significativo en los medios de subsistencia y, por tanto, podría ser irresponsable en sí misma. Las nuevas distorsiones del mercado pueden también marginar o erosionar la capacidad de negociación de los miembros más vulnerables de las cadenas de suministro de minerales, sobre todo de las comunidades mineras artesanales. Las empresas, especialmente las que se han beneficiado un tiempo de cadenas de suministro, tienen la obligación de mitigar y gestionar estos riesgos en la medida de lo posible. Las decisiones empresariales que han adoptado miembros del CI han afectado y afectarán a los medios de subsistencia de miles de mineros y mineras y sus comunidades. Los miembros del CI no deben pasar por alto todas las repercusiones que pueden tener sus decisiones sobre abastecimiento, y es fundamental que las nuevas intervenciones en el mercado no consoliden aún más la vulnerabilidad de los mineros y mineras artesanales. Por tanto, el CI deberá garantizar que anima a las empresas, en primer lugar y, sobre todo, a actuar de forma responsable y transparente, creando cadenas de suministro resilientes frente a los riesgos hallados en zonas afectadas por la corrupción, los conflictos o la inestabilidad.

Quedaríamos muy agradecidos si pudiéramos conocer mejor cómo van a integrarse los elementos antes enumerados en el plan del CIRAF, en proceso de desarrollo, para garantizar que el marco está alineado con la mejor práctica internacional y será de la máxima eficacia tanto para las empresas que lo adopten como para las comunidades afectadas por la minería del cobalto.

Firmantes:

Afrewatch

Amnistía Internacional

Enough Project

Global Witness

IMPACT

Observatoire Gouvernance et Paix

Rights and Accountability in Development

Save Act Mine

## **Casos**

Los siguientes casos exponen algunos de los riesgos identificados en cadenas de suministro de minerales relacionados estrechamente o de forma directa con el cobalto. En el contexto del CIRAF, demuestran la necesidad de ejercer la debida diligencia en la cadena de suministro, de que las empresas adscritas busquen riesgos y abusos con arreglo al anexo II de la Guía de la OCDE como requisito mínimo, y de que cada miembro de la cadena de suministro informe públicamente de respuestas responsables y adecuadas para garantizar que se adoptan medidas efectivas cuando aparezcan señales de alerta en la cadena de suministro.

### **Peores formas de trabajo infantil y otros abusos en la República Democrática del Congo**

En enero de 2016, Amnistía Internacional publicó el informe *This is What We Die For: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt*, en el que denunciaba que las principales marcas de electrónica no hacían comprobaciones básicas para garantizar que en sus productos no se usaba cobalto extraído por mano de obra infantil y por personas adultas que trabajaban en condiciones peligrosas.<sup>4</sup> El informe rastrea el cobalto desde las minas artesanales del sur de la República Democrática del Congo (RDC) hasta las empresas usuarias finales de la cadena de suministro.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional comprobó que la gran mayoría de los mineros y mineras pasan a diario largas horas trabajando con cobalto en túneles excavados a mano y sin reforzar, y sin el equipo de protección más básico, como guantes, ropa de trabajo o mascarillas para prevenir enfermedades pulmonares o dermatológicas. Estas personas están expuestas al riesgo de sufrir daños para la salud a largo plazo y a un riesgo elevado de accidentes mortales.

Amnistía Internacional concluyó también que había niños y niñas de apenas siete años trabajando en las minas artesanales, donde rebuscaban piedras que tuvieran cobalto descartadas en los desechos de las minas industriales, y después proceder al lavado y clasificación del mineral para su venta. Los menores a los que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que trabajaban hasta 12 horas diarias en la mina, llevando pesadas cargas, para ganar entre uno y dos dólares al día. Los riesgos para la salud y el bienestar de los niños y niñas hacen que la minería sea una de las peores formas de trabajo infantil. Varios menores dijeron también que guardias empleados por las empresas mineras les habían pegado o que habían visto que pegaban a otros niños cuando entraban sin autorización en las concesiones mineras de esas empresas.

La organización ha rastreado el cobalto de estas minas artesanales hasta una empresa de transformación china llamada Huayou Cobalt, cuyos productos acababan en las baterías que se utilizan para artículos electrónicos y vehículos eléctricos.

El informe mostraba que las empresas de la cadena de suministro del cobalto no abordaban los riesgos de ésta para los derechos humanos.

En 2017, Amnistía Internacional publicó el informe *Time to Recharge: Corporate Action and Inaction to Tackle Abuses in the Cobalt Supply Chain*,<sup>5</sup> que evaluaba las políticas y prácticas de 29 empresas, entre ellas muchas de las principales fabricantes de electrónica de consumo y de

automóviles, con el fin de identificar, prevenir, abordar y exigir responsabilidades por abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro del cobalto. El informe concluía que, aunque hay indicios de progreso por parte de algunas empresas, había demasiadas que seguían a la zaga. De forma significativa, ninguna revelaba información importante sobre los riesgos y abusos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro, tal como exigen las normas internacionales.

El informe de Amnistía Internacional de 2017 confirmó también que ninguna de las 29 empresas evaluadas había tomado medidas para proporcionar un recurso efectivo a los mineros y mineras que habían sufrido daños en sus cadenas de suministro, tal como exigen normas internacionales como los Principios Rectores de la ONU. Es probable que la mayoría de las empresas que se abastecen en la RDC, cuando no todas ellas, hayan contribuido a la comisión de abusos contra los derechos humanos en el país o se hayan beneficiado de ellos.

Amnistía Internacional no sólo ha denunciado abusos contra los derechos humanos en el sector de la minería artesanal, sino también los relacionados con la minería a gran escala.

El informe de Amnistía Internacional de 2013 *Profits and Loss: Mining and Human Rights in Katanga, Democratic Republic of the Congo*<sup>6</sup> documentó desalojos forzados de comunidades situadas en las proximidades de emplazamientos mineros. El informe de Amnistía Internacional de 2014 *Bulldozed: How a mining company buried the truth about forced evictions in the Democratic Republic of the Congo*<sup>7</sup> expuso cómo la empresa minera belga Groupe Forrest International mintió sistemáticamente sobre la destrucción de cientos de viviendas en la RDC, negando así la justicia a las personas afectadas. Su filial Entreprise Général Malta Forrest proporcionó las excavadoras que se utilizaron para derribar de forma ilegítima las casas y desalojar forzosamente a cientos de personas que vivían en las proximidades de la mina de Luiswishi, en Kawama (Katanga), en 2009, como parte de una operación policial para despejar la zona de Kawama de mineros a pequeña escala que supuestamente robaban de la mina de cobre y cobalto.

### **Ventas secretas de activos de cobre y cobalto de la República Democrática del Congo**

La minería industrial puede ser especialmente proclive a la corrupción, en parte debido al elevado valor de los productos y recursos implicados, la necesidad de una inversión de capital importante y el hecho de que las operaciones suelen realizarse en regiones con una gobernanza precaria. Esto queda perfectamente ilustrado en el caso de la RDC, donde dos empresas pertenecientes al Instituto del Cobalto quedaron envueltas en disputas de presunta corrupción en la adquisición de activos de cobre y cobalto.

Entre 2010 y 2012, Glencore y Eurasian Resources Group (ERG, que en aquel momento se llamaba Eurasian Natural Resources Corporation, ENRC) compraron importantes concesiones mineras en la RDC por valor de miles de millones de dólares.<sup>8</sup> Sin embargo, la mayor parte de ese dinero no llegó al Tesoro congoleño; los activos se vendieron en secreto, transferidos inicialmente a precios de remate a una serie de empresas extranjeras que luego los vendieron a terceros o alcanzaron lucrativos acuerdos con ERG y Glencore. El propietario de las empresas extranjeras y amigo personal del presidente congolés Joseph Kabila, Dan Gertler, obtuvo pingües beneficios.



Por ejemplo, ERG pagó a una de las empresas de Gertler 25 millones de dólares estadounidenses para adquirir una participación en una mina que a éste le había costado 15, y luego volvió a pagarle —otros 50 millones de dólares— para comprar la participación para ella misma; aparentemente, Gertler quintuplicó su dinero sin invertir en el desarrollo del activo ni usar parte alguna de su propia fortuna para adquirirlo.<sup>9</sup> Mientras tanto, Glencore ofreció acuerdos privilegiados de préstamo y compras de participaciones a algunas de estas empresas extranjeras —ofertas que no se extendieron al resto de sus socios en proyectos mineros de la RDC— que enriquecieron a Gertler y le permitieron a él y a Glencore hacerse con participaciones mayoritarias en importantes minas de cobre.<sup>10</sup>

Estados Unidos sancionó posteriormente a Gertler por firmar “acuerdos mineros corruptos” en la RDC.<sup>11</sup> ERG está siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) de Reino Unido por su relación con Gertler, mientras que, según noticias, Glencore está sometida a una investigación similar.<sup>12</sup> Glencore dejó temporalmente de hacer pagos contractuales a Gertler tras la imposición de las sanciones estadounidenses, pero en junio reanudó dichos pagos en euros en lugar de en dólares.<sup>13</sup> Queda por ver si el Departamento del Tesoro estadounidense tomará alguna medida en respuesta a estos pagos a una persona sancionada.<sup>14</sup>

Los costes de la corrupción tanto para el país anfitrión como para las empresas mineras pueden ser enormes. Es claramente vital que cualquier iniciativa para limpiar las cadenas de suministro del cobalto tenga seriamente en cuenta el riesgo de corrupción.

### **Por qué las certificaciones de los planes del sector no son fiables como prueba de buenas prácticas: el caso de Elemetal**

En 2016, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Internacional informó de que las autoridades judiciales de Perú habían acusado a seis refinadores internacionales de oro, cuatro de los cuales estaban acreditados por la London Bullion Market Association (LBMA), de actos delictivos derivados de la “apropiación de oro” en Perú entre 2013 y 2014, y del blanqueo de los beneficios de la minería ilegal.<sup>15</sup>

NTR Metals, un importante refinador estadounidense con sede en Miami y filial de Elemetal LLC (Elemetal), fue una de las empresas citadas en el informe. En aquel momento, el refinador de oro de Elemetal en Jackson (Ohio) (Elemetal Refining LLC) estaba certificado por la LBMA y la Iniciativa Fundiciones Sin Conflicto (CFSI).<sup>16</sup> Sin embargo, ninguna de las dos excluyó de sus listas de certificación a Elemetal Refining LLC hasta transcurrido un año, en marzo de 2017, cuando Bloomberg publicó las conclusiones de la investigación en relación con NTR Metals.<sup>17</sup> No está claro cómo se aplicaron los planes del sector mientras tanto para evaluar y gestionar los riesgos asociados a las denuncias relacionadas con NTR Metals.

El año pasado, fueron detenidos tres ex empleados de NTR Metals por su presunta participación en un plan de blanqueo de dinero procedente del oro por valor de varios miles de millones de dólares. El Departamento de Justicia estadounidense dijo posteriormente que los tres se habían declarado culpables de una conspiración para el blanqueo de dinero<sup>18</sup> y, según informes, los tres fueron condenados a penas de entre seis y siete años y medio de prisión. Elemetal y su filial NTR se declararon culpables el 16 de marzo de 2018 del delito de no mantener un programa adecuado contra el blanqueo de dinero. Elemetal aceptó pagar una multa de 15 millones de dólares

estadounidenses como parte de un acuerdo de admisión de culpabilidad con los fiscales federales. El jueves 24 de mayo de 2018, un juez federal aprobó el acuerdo de admisión de culpabilidad e impuso a la empresa un periodo de prueba de cinco años.<sup>19</sup>

---

<sup>1</sup> Instituto del Cobalto, *Introducing the Cobalt Industry Risk Assessment Framework (CIRAF)*, [https://www.cobaltinstitute.org/introducing-the-cobalt-industry-risk-assessment-framework-\(ciraf\).html](https://www.cobaltinstitute.org/introducing-the-cobalt-industry-risk-assessment-framework-(ciraf).html), consultado el 22 de mayo de 2018. La traducción de la cita al español es de Amnistía Internacional.

<sup>2</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”*, 2011, [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf), consultado el 28 de mayo de 2018; OCDE, *Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo*, 2013, [http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74761&name=LIBRO\\_DEBIDA\\_DILIGENCIA\\_FINAL.pdf&prefijo=file](http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74761&name=LIBRO_DEBIDA_DILIGENCIA_FINAL.pdf&prefijo=file), consultado el 24 de mayo de 2018; OCDE, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance*, 2018, <http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm>, consultado el 24 de mayo de 2018.

<sup>3</sup> Véase el caso correspondiente en el documento adjunto.

<sup>4</sup> Afreewatch y Amnesty International, *This is what we die for: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt* (Índice AFR 62/3183/2016), disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/>.

<sup>5</sup> Amnistía Internacional, *Time to Recharge: Corporate Action and Inaction to Tackle Abuses in the Cobalt Supply Chain* (Índice: AFR 62/7395/2017), disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7395/2017/en/>.

<sup>6</sup> Amnistía Internacional, *Profits and Loss: Mining and Human Rights in Katanga, Democratic Republic of the Congo* (Índice AFR 62/001/2013), disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/001/2013/en/>.

<sup>7</sup> Amnistía Internacional, *Bulldozed: How a mining company buried the truth about forced evictions in the Democratic Republic of the Congo* (Índice: AFR 62/003/2014), disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/003/2014/en/>.

<sup>8</sup> Pueden encontrar un resumen del trabajo de Global Witness sobre estos acuerdos en *Congo's Secret Sales* y documentos asociados, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/congo-secret-sales/>. Información de Rights and Accountability in Development (RAID) sobre la corrupción ligada a los acuerdos mineros en la RDC y en Zimbabwe, y su relación con Reino Unido: ‘Bribery in its purest form’: Och-Ziff, asset laundering and the London connection, enero de 2017, [http://www.raid-uk.org/sites/default/files/oz\\_bribery\\_in\\_its\\_purest\\_form\\_full\\_report\\_rev.pdf](http://www.raid-uk.org/sites/default/files/oz_bribery_in_its_purest_form_full_report_rev.pdf).

<sup>9</sup> Esto se refiere a transacciones relacionadas con la adquisición del activo de SMKK. Más detalles en Global Witness, *Out Of Africa*, mayo de 2016, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/out-of-africa/>.

<sup>10</sup> Global Witness, *Glencore and the Gatekeeper*, mayo de 2014, <https://www.globalwitness.org/en-gb/archive/glencore-and-gatekeeper/>.

<sup>11</sup> Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe*, 21 de diciembre de 2017, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243>.

<sup>12</sup> “El SFO está llevando a cabo una investigación penal sobre ENRC Ltd (antes ENRC PLC). La investigación está centrada en denuncias de fraude, soborno y corrupción en torno a la adquisición de importantes activos minerales”. Sitio web de la SFO: <https://www.sfo.gov.uk/cases/enrc/>. Bloomberg, “Glencore May Face U. K. Bribery Probe Over Congo Dealings”, 18 de mayo de 2018, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-18/glencore-said-to-face-u-k-bribery-probe-over-congo-dealings-jhbxhab4>.

<sup>13</sup> *Financial Times*, “Glencore settles legal dispute with former Congo business partner”, 15 de junio de 2018, <https://www.ft.com/content/21213516-7063-11e8-92d3-6c13e5c92914>.

<sup>14</sup> Global Witness, *Glencore must not pay millions to sanctioned individual*, 15 de junio de 2018, <https://www.globalwitness.org/en-gb/press-releases/glencore-must-not-pay-millions-sanctioned-individual/>.

<sup>15</sup> Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, *Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America*, 9 de abril de 2016, <http://globalinitiative.net/documents/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/>.

<sup>16</sup> Véase Bloomberg Business Week, “How to become an International gold smuggler”, 9 de marzo de 2017, <https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-09/how-to-become-an-international-goldsmuggler>; LBMA, Lista de refinadores de la LBMA incluidos en la antigua lista Good Delivery: <http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-former>; la Iniciativa Abastecimiento Sin Conflicto, actualmente Iniciativa Minerales Responsables: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>.

<sup>17</sup> Bloomberg Business Week, “How to become an International gold smuggler”, 9 de marzo de 2017, <https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-09/how-to-become-an-international-goldsmuggler>; Bloomberg, “Gold Company Manager Charged in Vast Peruvian Smuggling Plot”, 16 de marzo de 2017, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-16/gold-company-manager-charged-in-vast-peruvian-smuggling-scheme>; Bullion Directory,

---

LBMA (Quietly) Removes Elemetal's Good Delivery Status, 4 de abril de 2017, <https://bullion.directory/lbma-quietly-removes-elemetal-good-delivery-status/>; LBMA, lista de refinadores de la LBMA incluidos en la antigua lista Good Delivery: <http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-former>; Elemetal Refining, LLC ya no está en la lista de refinadores de oro cumplidores de la Iniciativa Minerales Responsables (antes CFSI): <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/gold-conformant-smelters/>.

<sup>18</sup> Departamento de Justicia, Distrito del Sur de Florida, *Four Peruvian Members of Multi-Billion Dollar, International Gold Money Laundering Scheme Indicted*, 9 de enero de 2018, <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/four-peruvian-members-multi-billion-dollar-international-gold-money-laundering-scheme>.

<sup>19</sup> *Miami Herald*, "How drug lords make billions smuggling gold to Miami for your jewelry and phones", 16 de enero de 2018, <http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article194187699.html>; *South Florida Business Journal*, "4 indicted in alleged multibillion-dollar gold scheme involving South Florida company", 10 de enero de 2018, <http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article194187699.html>; *Miami Herald*, "Illegal gold dealer weeps as he's sent to prison for money laundering", 31 de enero de 2018, <http://www.miamiherald.com/news/local/article197636559.html>; Departamento de Justicia, Distrito Sur de Florida, *U. S. Gold Refinery Pleads Guilty to Charge of Failure to Maintain Adequate Anti-Money Laundering Program*, 16 de marzo de 2018, <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/us-gold-refinery-pleads-guilty-charge-failure-maintain-adequate-anti-money-laundering>; *Washington Post*, "Gold refinery agrees to \$15M fine after money laundering", 16 de marzo de 2018, [https://www.washingtonpost.com/business/gold-refinery-agrees-to-15m-fine-after-money-laundering/2018/03/16/142ccc56-2961-11e8-a227-fd2b009466bc\\_story.html?utm\\_term=.5ba0414280cf](https://www.washingtonpost.com/business/gold-refinery-agrees-to-15m-fine-after-money-laundering/2018/03/16/142ccc56-2961-11e8-a227-fd2b009466bc_story.html?utm_term=.5ba0414280cf); *Miami Herald*, "Firm behind gold-fueled, Miami-based money-laundering racket fined \$15 million", 16 de marzo de 2018, <http://www.miamiherald.com/news/local/article205503659.html>; *Miami Herald*, "U. S. company at center of gold racket must pay \$15 million fine, Miami judge rules", 25 de mayo de 2018, <http://www.miamiherald.com/news/local/article211909529.html>.